

**EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL EN CHILE. APROXIMACIONES Y ANTECEDENTES PARA EL ESTUDIO DE LA REFORMA EDUCATIVA**

*The Chilean Student Movement. Background and Approaches for Studying the Educational Reform*

*Darío Salinas Figueredo  
Carolina Tetelboin Henrion*

**Resumen****Darío Salinas Figueredo**

Profesor-investigador del Posgrado en Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT.

Correo electrónico: [dario.salinas@ibero.mx](mailto:dario.salinas@ibero.mx)

**Carolina Tetelboin Henrion**

Profesora-investigadora de la Maestría en Medicina Social y el Doctorado en Ciencias en Salud Colectiva, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT.

Correo electrónico:

[ctetelbo@correo.xoc.uam.mx](mailto:ctetelbo@correo.xoc.uam.mx)

Las expresiones sociales de los estudiantes pautaron los acontecimientos políticos más relevantes de Chile durante 2011 y 2012. La construcción argumental de sus demandas, en cuyo proceso se movilizaron fundamentalmente estudiantes universitarios y secundarios, encontró en la defensa de la educación pública su más articulada expresión. Desde las ya lejanas manifestaciones en contra de la dictadura y a favor de la democracia no se ha vuelto a tener un escenario social de similar densidad y proyección política como el que lograron configurar los estudiantes en la historia reciente, convirtiendo su demanda en el hecho político más importante de este tiempo. Este trabajo busca ser parte de un debate en curso sobre el fenómeno estudiantil y educativo, poniendo especial interés en el trasfondo de las manifestaciones y explorar, más allá de su facticidad, el sentido de sus planteamientos frente a un sistema todavía aprisionado económica, política e institucionalmente por la herencia de un modelo de sociedad que tiene sus raíces en la dictadura. Al abordar las expresiones de este movimiento se busca mostrar uno de los grandes problemas no resueltos por la democracia electoral vigente. De allí que el objetivo básico de este trabajo consiste en colocar algunos antecedentes fundamentales para el estudio de la reforma educativa en curso.

**Palabras claves:** movimiento estudiantil, sistema educativo, lucro, participación, representación.

**Abstract:**

*The social expressions of the Chilean students guided the most relevant political affairs in Chile during 2011 and 2012. In the making of the storyline of their demands, in which process the students of the universities and the high schools (secundarios) were the main actors, the public education found its stronghold and the most articulated expression. From the now distant manifestations against the dictatorship and for the democracy there has been no social scenario configuration with the same density and political projection like the one the students achieved in the recent history, turning its presence in the most important political fact of this time. This work seeks to be part of an ongoing debate about the student and educational phenomenon, focusing in the under and overtone of the manifestations and explore, beyond the facticity, the sense of its arguments in front of a system that is still imprisoned economically, politically and institutionally through the heritage of a model of society which is deeply enrooted in the previous dictatorship stage. When we approach the expressions of this movement we attempt to show one of the big and unsolved problems of the current electoral democracy. Hence that the basic objective of this work remains in placing some fundamental background, for the study of the ongoing educational reform.*

**Keyword:** *Student movement, educational system, moneymaking, participation, representation.*

**1.- La problemática**

El escenario de la historia política más reciente no se entiende sin la emergencia y masiva presencia de comportamientos colectivos de gran envergadura en distintos lugares del mundo y desde luego en la región latinoamericana. Sus expresiones hacen parte de las movilizaciones ciudadanas (Oliver y Savoia, 2012) en un contexto de crisis multidimensional. No hay uniformidad en sus manifestaciones, pero sus expresiones contienen señales que van de la inconformidad a la indignación. En cualquier caso, todas propenden a cuestionar los resultados sociales de la democracia y la participación, planteando con mayor o menor articulación, un horizonte diferente para pensar la política y las respuestas estatales (Fazio, 2012; Roitman, 2012). En la medida que las demandas y sus expresiones sociales se dirigen al sistema político, han recibido respuestas que combinan la desacreditación a sus planteamientos, la tergiversación mediática de sus argumentos y la infaltable dosis de coacción y represión activadas desde el poder político.

En el contexto de estas referencias generales, interesa primordialmente aquí hacerse cargo de la experiencia reciente de Chile, situada en el estadio que precede a las últimas elecciones presidenciales de 2013. La preocupación no pretende encerrar el análisis dentro de los parámetros de una coyuntura. Por el contrario, la idea consiste en detectar tendencias y manifestaciones para intentar una explicación de mayor durabilidad en el tiempo histórico frente a los desafíos democráticos no resueltos. De allí el planeamiento de estudiar al movimiento estudiantil desde el punto de vista del contexto social y las condiciones institucionales en que se manifiesta.

En el debate latinoamericano es frecuente encontrar de manera recurrente afirmaciones y diagnósticos que le otorgan a la experiencia chilena los atributos de un “modelo exitoso”. En el ranking internacional destaca la imagen vinculada a la estabilidad política y la regularidad en la mantención de los equilibrios macroeconómicos. Contrariamente, en el desenvolvimiento de la sociedad se ha generado, cada vez con mayor acento, expresiones múltiples de malestar social, demandas y conflictos no resueltos. Asumir esta paradoja implica explorar de dónde provienen las expresiones de malestar, con qué problemáticas se vinculan o coinciden, los obstáculos a los que se enfrenta una sociedad formateada por la historia de la dictadura y el peso de su herencia institucional, en la perspectiva actual de su democratización social y política.

Sin ser el único foco de la conflictividad social, es alrededor del sistema educativo, donde se ha instalado una de las mayores preocupaciones con capacidad de influencia en la política del país. Su ámbito de afectación compromete a grupos etéreos importantes de la juventud. Ante ello la activación estudiantil, de larga data en la historia de los movimientos sociales, adquiere actualmente un inusitado protagonismo al colocar en la agenda del país algo que parecía impensado y que fue configurándose alrededor del tema del tipo de educación, sobre la cuestión pública y la gratuidad.

Puesto que no es el único ni el primer movimiento que irrumpe en el escenario político actual, conviene preguntarse por qué sus planteamientos y demandas adquieren una dinámica de tal transversalidad que logra impactar al conjunto de la sociedad. La

hipótesis más plausible es que sus argumentos al entroncarse con señales de que la educación forma parte del mundo del negocio o del lucro como principio organizativo de la sociedad, asume la potencialidad propia de una agenda nacional. Un supuesto importante cabe formular al respecto, que la movilización de los estudiantes coincide con un clima de malestar social previamente incubado.

## ***2.- La compleja relación ciudadanía-política en su contexto institucional***

Las expresiones sociales y los conflictos que le sirven de correlato nunca ocurren el vacío. En lo que tiene de utilidad esta premisa, su mismo enunciado coloca un ángulo de preocupación en el que se asoma de inmediato la problemática del contexto institucional y de la participación. Mientras la política no abra una discusión sobre alternativas que involucren al país, el vigente sistema electoral seguirá probablemente cumpliendo su objetivo estratégico de adulterar el concepto de mayoría, imponiendo el peso de la sobre representación afín al modelo, el ejercicio del chantaje legal de una minoría y evitando los cambios institucionales que están planteados en función de la democratización. Por algo se trata de una problemática que interpela agudamente a la de la discusión política. Pero más allá del peso específico que asume el sistema electoral en Chile, hay otra dimensión que la precede de un modo probablemente más decisivo y que tiene que ver con el entramado de los actores políticos y su forma de hacer política.

Podríamos pensar que en lo que fueran los gobiernos de la Concertación por la Democracia (1990-2009), en un principio no podía estar por expandir ni profundizar la fuerza de la demanda democrática que supo capitalizar y en la que se apoyó para la transición, sino en garantizar primordialmente las condiciones de retirada de la dictadura de la esfera gubernamental. De allí la característica, durante un primer momento de su política, en el sentido de impulsar una transición a la democracia más preocupada por la estabilidad que por los cambios. Incluso la supuesta potencialidad de una “reversión autoritaria” no parecía demasiado descabellada en su discurso. Pero aquella tónica de su narrativa inicial se fue convirtiendo en una práctica regular, haciendo a su turno que la política predominante fuera cada vez más conservadora y cupular, desconectada de la ciudadanía, cercenando el sentido del debate, la disputa de

alternativas inherente a la política y privilegiando la política de “lo posible”, bajo una modalidad cada vez más pragmática, sin horizonte de transformación, acorde con las restricciones institucionales y enteramente coherente con el poder hegemónico de las fuerzas del régimen (Garretón, 2012).

Desde el punto de vista social se alimentaron expectativas especialmente durante el cuarto gobierno de la Concertación (2005-2009), en el sentido de revertir esas tendencias. Tampoco hay que desmerecer el hecho de que este gobierno haya iniciado su gestión tras haber obtenido ligera mayoría en el parlamento, además de la imagen privilegiada que rodeó a la electa presidenta Michel Bachelet. Todas las ventajas, que tal vez le hubieran permitido avanzar con mayor voluntad fueron dilapidadas, profundizándose con ello la distancia entre ciudadanía y política. Durante este período no se produjeron señales democratizadoras consistentes, empezando por la derechización del equipo económico, la composición conservadora de algunas comisiones de reforma, como la del sistema previsional y el empantanamiento de las discusiones en y fuera del Parlamento sobre temas sustantivos como la Ley Electoral, la Reforma Laboral y la educación. En su orientación fundamental, todo aquel período constituyó otra vuelta de tuerca en la espiral conservadora del proceso transicional chileno (Salinas, 2007). Más allá de los empeños, como los de la propia presidenta Bachelet en alguna de sus iniciativas, pudo apreciarse un desgaste muy acentuado en la nucleación concertacionista, cuya dinámica no hizo más que contribuir a mantener el carácter de la gestión gubernamental, predeterminada por la lógica de la gobernabilidad conservadora, por el cumplimiento de las metas económicas de crecimiento y de apertura, todo lo cual a su turno condicionó severamente los espacios para una genuina política de profundización democrática.

Aquel cuarto y último gobierno de la Concertación, que se enfrentó en diciembre de 2009 a la contienda electoral, fue derrotado por la coalición de derecha con lo cual se puso término formal a su gestión el 11 de marzo de 2010, sin haber logrado modificar de manera sustantiva las condiciones económicas, institucionales y los fundamentos de la dominación neoliberal. Todo indica que el ciclo político bajo la hegemonía de la

Concertación se cerró como experiencia post-dictatorial. Sobre sus escombros se sitúa la experiencia de un gobierno de derecha de la “Alianza por Chile” encabezado por Sebastián Piñera que, tras obtener la mayoría en la segunda vuelta electoral realizada en diciembre de 2010, desarrolló un proceso programático reafirmando la continuidad del modelo en su sentido más conservador. En las siguientes elecciones de 2013 esta coalición es derrotada en la segunda vuelta en correspondencia con las expectativas de un nuevo ciclo político que buscaba enrumbarse por otra senda, asumiendo los saldos de una democratización limitada, con reformas de corte neoliberal, y un debate no realizado sobre los límites de la participación en el marco del rígido diseño institucional intacto.

La apretada síntesis anterior puede dejar la impresión de que en Chile existe un sistema electoral que garantiza procesos democráticos que hasta se da el lujo de jugar con esquemas de alternancia. Detrás de esa apariencia se esconde una densa cuestión no resuelta que oculta el tema de la participación y representación, asuntos problemáticos de los que la política no se ha hecho cargo. De allí que el sistema electoral chileno, considerado un “garante institucional de la estabilidad”, es apenas una hebra en la inmensa madeja que encierra la complejidad de un sistema no representativo.

En el contexto actual, marcado por una creciente movilización de demandas provenientes de sectores muy diversos de la sociedad, especialmente de los estudiantes, se han instalado los requerimientos para un debate orientado a vincular las señales de malestar social con la participación. Sus referencias están en la prensa, en la producción académica y en la opinión pública. A pesar de la coincidencia acerca de su desarrollo, las visiones sobre su significado e implicancias son divergentes.

### ***2.1. La participación en la democracia electoral***

Para considerar la inconsistencia de la democracia electoral, resulta ilustrativo observar algunos datos que se desprenden de los registros de las últimas dos elecciones presidenciales. En la segunda vuelta que otorgó la mayoría a la coalición de derecha encabezada por Sebastián Piñera, “Alianza por Chile”, la relación entre votos

válidamente emitidos y número de no participantes arroja un abstencionismo del 42. 87 por ciento. De la población en edad de votar se registra un 31. 98 por ciento que ni siquiera se inscriben, cuando esto todavía era voluntario. No es un dato menor constatar que la mayoría que técnicamente se constituye como tal y con la cual se otorga el triunfo de un candidato presidencial, representa para ese momento apenas el 29.48% de votantes potenciales y que en la contienda electoral misma dejan de participar 5.221.441 personas de un total 12.180.413 considerado el universo en edad de votar, lo cual ubica al abstencionismo de este país entre los más elevados en la geografía electoral de América Latina (CELAG, 2014).

**CUADRO N° 1**

<b>Participación en la elección presidencial en el 2009 (Segunda Vuelta)</b>				
		Personas	Porcentaje sobre votos válidos	Porcentaje sobre votantes potenciales
<b>Votos válidamente emitidos</b>	Sebastián Piñera Echenique	3.591.182	51,61%	29,48%
	Eduardo Frei Ruiz-Tagle	3.367.790	48,39%	27,65%
		6.958.972	100,00%	57,13%
<b>Votos no participantes</b>	No inscritos	3.895.227	-	31,98%
	Abstenciones	1.081.815	-	8,88%
	Nulos y blancos	244.399	-	2,01%
	No participantes	5.221.441	-	42,87%
<b>Población en Edad de votar</b>		12.180.413	175,03%	100,00%

Fuente: elaboración propia con base en datos del Servicio Electoral, SERVEL. Años correspondientes.

Para mostrar la hipótesis de que estamos ante una tendencia que apunta a mantener una débil participación ciudadana en las elecciones presidenciales, es importante observar comparativamente estos mismos registros con los datos de la siguiente contienda electoral.

CUADRO N° 2

Participación en la elección presidencial en el 2013 (Segunda Vuelta)				
		Personas	Porcentaje sobre votos válidos	Porcentaje sobre votantes potenciales
<b>Votos validamente emitidos</b>	Michelle Bachelet	3,470,379	62.17%	25.92%
	Evelyn Matthei	2,111,891	37.83%	15.77%
		<b>5,582,270</b>	<b>100,00%</b>	<b>41.69%</b>
<b>Votos no participantes</b>	Inscritos (al 2012)	13,388,643	239.84%	100.00%
	Abstenciones	7,690,892	137.77%	57.44%
	Nulos	82,916	1.49%	0.62%
	Blancos	32,565	0.58%	0.24%
	<b>No participantes</b>	<b>7,806,373</b>	<b>139.84%</b>	<b>58.31%</b>
<b>Población en Edad de votar</b>		13,388,643	240%	100%

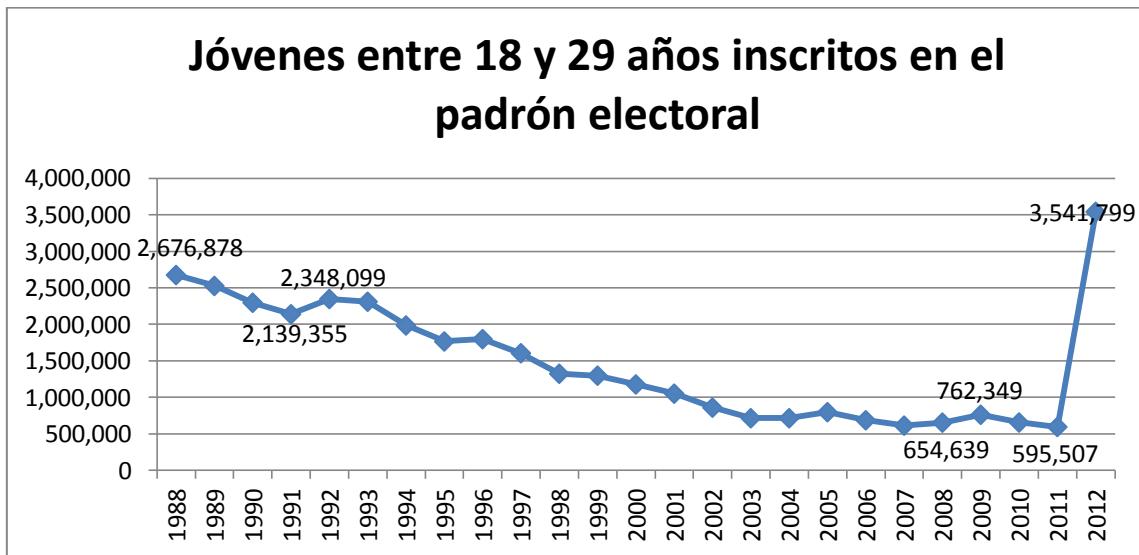
Fuente: Elaboración propia con base en Tribunal Calificador de Elecciones Chile y el Servicio Electoral, SERVEL, años correspondientes.

En esta elección de 2013, como se puede observar en el cuadro N° 2, la contienda otorgó la mayoría a la coalición denominada “Nueva Mayoría” encabezada por Michelle Bachelet. La prueba empírica sugiere que la tendencia abstencionista sigue su curso ¿Por qué? La respuesta más perentoria y conservadora consiste en afirmar que esa expresión implica desinterés por la participación política, lo cual debe ser discutido desde un principio. Desde la sociología electoral conviene suponer que no hay al respecto una sola interpretación. Otra forma de abordarla nos conduce a una apreciación que debiera ser políticamente preocupante, en el sentido de que la abstención es una forma de participación que puede estar revelando una aguda falta de credibilidad ciudadana frente a la forma de hacer política y sus instituciones. Si la historia social reciente de Chile tiene en las luchas sociales su mejor referente para radiografiar la búsqueda de la participación, significa entonces que ese cúmulo de experiencia no está reflejado en los escrutinios ni en la representación electoral.



La gráfica que se refiere a la inscripción de jóvenes en el padrón electoral resulta en extremo didáctica para dimensionar este problema. Entre 1988 y 2010, el registro de inscripción en cifras absolutas, considerando la población en edad de votar en los años de referencia, desciende estrepitosamente. Como todo indicador no determinada con exactitud la conducta social, pero sugiere de modo muy elocuente el desarrollo de un agudo descenso de (al menos) el interés por participar en las elecciones.

GRÁFICO N°1



Fuente: Elaboración propia a partir del Servicio Electoral, SERVEL, años correspondientes.

Este grupo poblacional es de particular sensibilidad frente a la problemática social, por ejemplo el empleo, la educación y la simple pero no menos compleja percepción sobre las perspectivas de su desarrollo, así como las expectativas de su inserción en el mundo real de las oportunidades. Más todavía en la circunstancias de Chile en las que, bajo la hegemonía estructuradora del mercado, no hay cabida para una acción reguladora estatal en favor de una política dirigida a la juventud. Con estos datos de referencia se torna más plausible la sospecha de que en esta institucionalidad no están representados los intereses no sólo de los jóvenes, sino tampoco de la gran mayoría.

La modificación abrupta en la curva de registro que dibuja la gráfica de marras y que se produce exactamente en el año 2012, no cambia la realidad. La cifra de registro que se incrementa obedece a un simple cambio administrativo, instrumentado precisamente a

raíz de la preocupante conducta abstencionista. En efecto, la aprobación de la Ley 20.337 que modificó los artículos 15 y 18 de la Constitución promulgada en enero de 2012, consagra la inscripción automática y el sufragio voluntario. Si el supuesto de creer que cambiando estos mecanismos se estaría “perfeccionando” el sistema electoral, demuestra su completa inoperancia. El registro automático incrementa ciertamente el padrón electoral, pero no sabemos cuántos de los que automáticamente quedaron inscritos modificaron su confianza para participar. Las elecciones municipales del 2012 y más tarde las presidenciales y parlamentarias, no muestran cambios en la conducta electoral. El punto al que ha llegado el debate en el seno de la clase política sigue sin tener el concurso activo de la ciudadanía. La percepción ciudadana, sus demandas y sus formas de participación no tienen en los espacios institucionales su punto más importante de representación.

Bajo tales condiciones en Chile no existe el consenso activo de los gobernados. La existencia combinada de un sistema político no representativo desincentiva la participación y la competencia, aunado a una forma predominantemente pragmática de encarar los problemas, todo lo cual ha ido creando dos mundos, el de lo social y el de lo político. La brecha entre ciudadanía y política ó gobernantes y gobernados, es una realidad y un gran desafío para la democracia.

## ***2.2. La lucha estudiantil en el contexto de la desconfianza ciudadana***

Para colocarnos frente a una mejor perspectiva conviene hacer el ejercicio de retroceder un poco en el tiempo. Cuando el segundo gobierno de la Concertación se acercaba al término de su mandato, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo publicó un extenso diagnóstico sobre la dimensión subjetiva de la ciudadanía. A partir de diversas encuestas de opinión realizadas en aquel período y no obstante lo destacado que para el organismo internacional parecían los registros de la economía chilena en América Latina, al mismo tiempo llegaba a la conclusión de que “los chilenos parecen volverse más escépticos acerca del progreso del país”. (PNUD, 1998: 47). De “perfil vago” y de “contenido inasible” fueron las caracterizaciones utilizadas por Norbert Lechner (2002) sobre el mismo fenómeno a un poco más de una década de haberse

iniciado el proceso post-dictatorial. El presupuesto acerca del efecto de desafección ciudadana se dirige hacia el sistema político (Thazá, 2003). Más allá de la adhesión al régimen democrático, después de 17 años de dictadura militar, el síntoma que emergía indicaba la pérdida de credibilidad ciudadana en las instituciones (PNUD, 2004), fenómeno que gradualmente se ha instalado en la realidad. Una investigación que abordó la relación entre ciudadanía y política, distante en el tiempo del escenario actual, señaló entre sus conclusiones que “El malestar y el desencanto hacia la política se origina, entre otras cosas, en el contraste entre ideas económicas de inspiración neoliberal y un sociedad que no las comparte, mira críticamente a los empresarios, y al mercado y prefiere un rol activo del Estado en la economía” (Huneus, 2003: 16).

Lo que inicialmente fue interpretado como un síntoma de desafección ciudadana, después de las luchas estudiantiles y de otros movimientos de 2011 y 2012 (Tetelboin, 2013), o junto con ellas, van adquiriendo perfiles nítidos de un malestar social generalizado. A la luz de las encuestas aparecen registros de desaprobación para la clase política. Esa desaprobación dibuja una tendencia de opinión en la cual hay una apreciación manifiesta, superior al 50 por ciento, que no se identifica con ninguna de las coaliciones políticas (Centro de Estudios Públicos, 2012). El rechazo social, los diversos cuestionamientos y fórmulas de recambio no han logrado presentar una propuesta política que aglutine la fuerza suficiente para cambiar el estado de cosas. Aunque aparece asociado a la degradación que se encuentra la institucionalidad política desde el punto de su legitimidad de origen y por lo tanto su calidad democrática, se mantiene en los hechos y se reproduce todo el andamiaje de la política dominante. Si las señales de crisis en el ámbito de la participación y la representación se siguen profundizando, la dinámica consecuente es que se siga ampliando la brecha entre ciudadanía y política.

### **3. El movimiento estudiantil y el sentido de las demandas**

Si esta trayectoria, apenas aquí esbozada, indica el desarrollo de un proceso social que parece más profundo y que se ha venido decantando en el sentido de configurar una brecha cada vez más grande entre el sentir de la ciudadanía y la política, entonces no se

puede argumentar que el estallido del movimiento estudiantil sea una casualidad, ni una “insubordinación de la ciudadanía frente al sistema político que nació con Pinochet” (Tironi, 2012). Ciertamente este movimiento no es el único, pero es el más articulado desde el punto de vista organizativo, de la consistencia de su demanda, de su narrativa política, de su creatividad y desde luego de su capacidad de convocatoria. Este movimiento no es espontáneo, tiene antecedentes y registra un proceso de aprendizaje y maduración. No obstante los cortes generacionales y las circunstancias cambiantes, en la lectura de sus “intelectuales orgánicos”, el movimiento se reconoce en la historia política del país y en la trayectoria de la Federación de Estudiantes de Chile de la cual fue también Salvador Allende fue uno de sus principales dirigentes. Tampoco se ignoran sus expresiones diversas de resistencia durante la dictadura (Guerrero, 2011; Ramis, 2011; y, Vargas, 2011).

Pero su emergencia en la historia reciente se teje alrededor de planteamientos inicialmente puntuales que se traducen en demandas movilizadoras, como la gratuidad del transporte. En un nivel de mayor elaboración argumental, se posicionan frente al carácter de los exámenes de ingreso como la Prueba de Selección Universitaria que se instrumenta desde 2003 y que sirve de dudosa referencia para uno de los índices de calidad. Luego se transforma en un cuestionamiento importante al sistema educativo, derivado de la reforma neoliberal realizada durante la dictadura y que se plasmara en la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE). Sus planteamientos, exigencias y movilizaciones dieron lugar a la llamada “revolución de los pingüinos” durante el 2006 y que a raíz de su impacto social tuvo importantes consecuencias políticas, entre ellas la renuncia del Ministro de Educación. En esa línea de consecuencias políticas, se introdujo en la agenda gubernamental la discusión de la educación como asunto fundamental de la política pública, cuestión que no alcanzó a encarar la problemática en su magnitud requerida aunque haya derivado en la creación de un Consejo Asesor a nivel presidencial para la Educación. Aquel Consejo, como forma cupular de abordar los problemas sociales en Chile, tiene que ver con la concepción restringida de ciudadana, cuando se trata de responder en favor de involucramiento social en asuntos fundamentales, que en definitiva apenas alcanza para ofrecer la apariencia de una

participación lejos, por supuesto, de un conducto idóneo de democratización sustantiva. De allí que los Consensos forjados a ese nivel, no tuvieron ninguna durabilidad, pero logró mantener el germen de la insatisfacción social. La inclusión en estas formas de representación formal de los estudiantes, dentro de un espectro diverso pero no favorable a las demandas estudiantiles, no se tradujo desde luego al interior del Consejo en una genuina correlación que favoreciera los cambios exigidos. La prueba más palpable de aquella experiencia es que la derogación de la LOCE y la creación en su reemplazo de la Ley General de Educación aprobada por el Congreso, no produjo cambios sustantivos, manteniéndose aspectos fundamentales de la ley pinochetista.

Hay ciertas formas de razonar que encontramos en algunos autores, por ejemplo en Garretón et al. (2012), que al estudiar estas experiencias indagan la viabilidad de esquemas que parecieran complementarios a las disponibilidades institucionales, como los Consejos Asesores, como forma de lograr una profundización democrática en su dimensión participativa. El resultado de estos esquemas, sugieren más bien otras perspectivas que refuerzan la visión no participativa de la política, aunque invoquen la participación y la problemática de la representación en la formulación de la política pública. Por la composición y la forma en que fue integrado el Consejo Asesor Presidencial de la Educación, su dinámica se constituyó en aquella coyuntura, en un referente formal desbordado por la política por el sentido de la demanda y las presiones estudiantiles. Lo que de hecho provocó la constitución del Consejo, fue el debilitamiento del proceso de movilización estudiantil y la cooptación de sus demandas.

Un punto insoslayable de aquella experiencia del 2006 y la lucha estudiantil, que queda no obstante instalada como referente en la sociedad chilena, quizás sea la importancia de pensar en la perspectiva de una reforma integral al sistema educativo. Es decir, el contenido de las reformas en el marco de un modelo económico y político de enorme rigidez. Aparentemente se dice fácil. La cuestión pasa por repensar que no basta con reconocer al problema educativo en el ámbito de la política pública, cuyo carácter no se reduce a la esfera estatal aunque exija que el Estado cumpla su función de garante. La problemática educativa es consustancial a la cuestión pública, y el ámbito que a ésta

corresponde no se reduce a lo estatal. Este ángulo comprensivo es fundamental cuando estamos enfrentados a un modelo de mercado intacto.

Así como la Constitución o el sistema electoral binominal, la salud, la seguridad social, la educación también pueden abordarse por partes con el riesgo, absolutamente previsible, que dichos cambios no alteren la configuración orgánica del todo institucional. Aunque el lucro esté prohibido por la ley, su práctica ha sido un detonante en la articulación de la demanda estudiantil. Ese modelo ha convertido el derecho a la educación en una mercancía. Cualquier intento de reconstruir ese denso entramado de negocios alrededor de la educación sería completamente redundante teniendo disponible la acuciosa investigación Momkeberg (2013). Su obra constituye un verdadero arsenal de información y ofrece un análisis sistemático de la trayectoria mercantil seguida las principales universidades privadas a partir del Decreto Ley N° 1 promulgado por la dictadura en 1981. El neoliberalismo, impuesto bajo dictadura en la experiencia de Chile será defendido por la derecha, sus coaliciones y aliados. Ese sistema, está visto, dispone de recursos y capacidades para reproducirse, sin dictadura y en democracia, a tal punto que hasta puede tolerar decisiones de reformas, siempre que no se modifique la esfera mercantil de activación de la ganancia privada y el Estado siga en lo fundamental desempeñando un rol subsidiario.

Su dinámica hace parte del diseño institucional que garantiza y legaliza a la sociedad chilena como un gran mercado. Esto explica el alto costo para las familias que sufragan la educación de sus hijos y que se complementa a su vez con una creciente erogación estatal a través del sistema del CAE. Bajo esta mecánica, parte importante del flujo de recursos generados tiene en el sistema financiero su punto de llegada. Entonces, aquella experiencia de movilización estudiantil deja abierta la pregunta, completamente vigente, acerca de cómo pensar el sistema educativo más allá del entramado del neoliberalismo.

Estos son los elementos que germinalmente articularon el sentido argumental de aquel movimiento del 2006 y que se refuerzan con expresiones de mayor alcance en las movilizaciones que se producen especialmente desde el 2011. Los planteamientos

movilizadores en el escenario del país con su consigna de “no al lucro” y a favor de una “Educación pública, gratuita y de calidad” buscaron la apertura de mecanismos de participación y para un diálogo con las autoridades y el gobierno (Boric, 2011; Vallejo, 2012). Sus expresiones sociales de lucha, públicas, movilizadoras y de interlocución transversal, se alimentaron con el desarrollo de sus argumentos y gravitando en un país cuya política hegemónica ha evadido sistemáticamente el debate y la confrontación de ideas sobre los problemas de fondo que aquejan a la sociedad. En esta perspectiva, lo que no puede dejar de señalarse, es que su capacidad de convocatoria alrededor de los puntos enarbolados como plataforma de lucha ha provocado un impacto de proporciones nunca antes vista durante este período de recuperación de la democracia, porque puso en entredicho los grandes presupuestos del modelo chileno, expresados en su invocaciones de éxitos o que han sido difundidos socialmente como si fueran parte del sentido común.

No es exagerado proponer que si hay un empuje social a favor de la democratización política, es porque se ha desarrollado un movimiento por la educación con estas características. Por la amplitud, grado de organicidad y la simpatía que ha despertado en la sociedad, este movimiento estudiantil bien puede compararse con las fuerzas que se amalgamaron en la lucha contra la dictadura en el sentido de su amplitud y voluntad transformadora.

El camino para enfrentar la demanda estudiantil constituida en demanda ciudadana, fue en el gobierno de Piñera de similar factura política a las desarrolladas por la Concertación. En lo fundamental, la respuesta se orientó a evitar la discusión abierta y de fondo del sistema educativo y sus implicancias estructurales. Hacerlo, habría implicado abrir una agenda sobre la matriz que soporta el funcionamiento del régimen político, coadyuvante de las actuales relaciones económicas, sociales y políticas del país. La respuesta oficial que siguió a las demandas se limitó a la combinación de ofertas hacia un reforzamiento de las becas, el otorgamiento de créditos a tasas menores, mantención y ampliación al subsidio a la demanda. Por otro lado, no descuidó la ofensiva mediática de desacreditación del movimiento, dosificación de las medidas de

represión directa y el afán de tipificar nuevos delitos para ejercer el control del orden público. En cualquier caso, lo inomitible es que el movimiento estudiantil incidió en la configuración de la agenda del país y concitó la adhesión ciudadana. El gobierno, que en un comienzo rechazó la demanda estudiantil y la existencia del lucro en la educación, terminó de algún modo asumiendo el sentido del reclamo propiciando que las propias autoridades del Estado investigaran el lucro. Entre el rechazo a la existencia del lucro y suscribir la constitución de una comisión expresamente integrada para investigarla, muestra la capacidad de incidencia que tuvo el movimiento.

Si este movimiento constituye parte significativa del trasfondo que se expresa en los indicadores de malestar, hay que señalar que sus manifestaciones ocurren y se proyectan en un contexto en que la forma predominante de hacer política atraviesa por uno de los peores momentos en términos de credibilidad y legitimidad. Las encuestas indicaban una creciente impopularidad de quienes estaban a la cabeza de las decisiones gubernamentales del gobierno de Piñera. Independientemente de las dos coaliciones, la “Coalición por el Cambio”, en el gobierno, y la “Concertación de Partidos por la Democracia”, en la oposición, que se ha dado en llamar “clase política”, exhiben a la vez las señales de un creciente rechazo ciudadano. Del otro lado, ese segmento en el que se nuclea la juventud se juega su futuro y el movimiento estudiantil con su agenda y su comportamiento propone una tarea larga que recién comienza y que, a pesar del control de la prensa que tergiversa o ignora sus acciones, se gana a la ciudadanía con propuestas que involucran por sus alcances la necesidad de una profunda revisión del modelo de sociedad.

Modelo que ha producido “resultados”. Produce desigualdades y más allá de sus políticas ha quedado demostrado que no dispone de aptitudes distributivas. Es más, los males que produce el modelo no alcanzan a corregirse con sus políticas. (Ffrench-Davis, 2004; Quiroga y Ensignia, 2010). Desde la LOCE la dinámica mercantil que envuelve a la educación se ha venido profundizando. Una decisión importante que operó como verdadero acelerador fue la promulgación en el 2005 de la Ley 20.027 en virtud de la cual se estableció el Crédito con Aval del Estado, CAE. Este instrumento, de carácter



financiero, aprobado de manera inconsulta durante el gobierno de la Concertación, terminó por abrir completamente las puertas de la educación al sistema bancario. Bajo el ropaje ideológico del “acceso a la educación para todos” se impulsó la posibilidad de estudiar y obtener una profesión sobre la base de un endeudamiento. Los deudores de este sistema ya constituyen una franja poblacional considerable, entre los cuales se cuentan familias cuyos hijos en una proporción importante se han visto obligados a abandonar la carrera con la onerosa y frustrante carga de tener que amortizar la deuda contraída. No es muy complicado imaginar el tipo de sentimiento social que acarrea esta experiencia.

La segregación no constituye una consecuencia, en estricto sentido no es lícito hablar de “resultados”, sino parte consustancial de la estrategia del modelo neoliberal. Su componente mercantil se reproduce sistemáticamente en la educación. Así, por ejemplo, se conoce que el grado de segregación de la educación chilena es muy elevado, ratifica el índice de disimilaridad de Duncan utilizado por la OCDE. Mientras Chile obtiene una cercana en promedio al 0.7, la media de la OCDE oscila entre 0.3 y 0.4, siendo 1, como es sabido, el índice de máxima segregación. Si se estableciera un paralelismo, este registro es muy similar a lo que arroja el coeficiente de Gini, el cual revela para Chile la peor distribución del ingreso en la OCDE. La marcada estratificación social se reproduce acentuadamente en la educación, incluso cuando ésta haya ampliado su cobertura. Hijos de familias socioeconómicamente altas en escuelas particulares; hijos de clase media en particulares subvencionadas y los pobres en las escuelas municipalizadas. (Fundación Terram 2011; Waissbluth, 2013). Lo que ya se sabía, que Chile figuraba entre las economías de peor distribución y que el sistema educativo profundiza las desigualdades sociales, dejó de ser solo un registro. Con el movimiento estudiantil esas expresiones estadísticas se han trasladado al plano de la percepción social, en una estrategia de demanda y exigencia política a favor de una genuina reforma, lo cual es benéfico para enfrentar con nuevas perspectivas el empantanamiento en se encuentra la política y sus instituciones desde el punto de vista de la democratización, la representación y la participación. La plataforma programática triunfante en las elecciones presidenciales del 2013, tiene a la reforma educativa entre

sus prioridades políticas, cuyo enunciado por sí solo ya anticipa una nueva fase de lucha de la ciudadanía y el movimiento estudiantil.

### **Reflexiones finales**

El análisis del proceso político reciente alimenta el debate sobre el fin de un ciclo político y la posibilidad de que Chile se encuentre frente a un nuevo período. El malestar, que constituye un síntoma social, tiene un denso trasfondo en el que uno de los actores en el escenario actual son los movimientos sociales de cuya diversidad dan cuenta sus propias expresiones, demandas y espacios de referencia, siendo el movimiento estudiantil el que alcanza a ofrecer una mayor consistencia e impacto en la agenda de la política. Su organización y capacidad argumental han puesto de manifiesto, por medio de la crítica al sistema educativo, las limitaciones estructurales del modelo económico y político de la sociedad chilena. Su desarrollo ha reactivado el papel de la ciudadanía de cara a la política que se instauró bajo la dictadura y que se ha modificado muy parcialmente dentro de los márgenes de tolerancia que permitió la coalición de derecha amparada por la institucionalidad heredada y el sistema electoral todavía intacto.

El descontento se desplegó en un gran movimiento contra el lucro en la educación, lo cual rápidamente trascendió las fronteras del sistema educativo, proyectándose de alguna manera a todos los campos de lo social. En tal sentido, dejó en evidencia el esqueleto del diseño social en que descansa el modelo, habida cuenta del desplome de sus recursos justificadores. (Mayol, 2012). La respuesta del Estado ha sido la respuesta del poder hegemónico, de negación, de rechazo, de tergiversación de la demanda, y la represión, porque si se abordaba la cuestión del lucro en la educación, el peldaño siguiente era, en lo inmediato, las otras áreas mercantilizadas y el propio papel del Estado. Si se abre el flanco del Estado, en teoría garante en materia de educación, inmediatamente aparecería el sistema de salud, luego la vivienda, seguramente después la seguridad social y las pensiones, todo lo cual potencialmente apunta al desmontaje del modelo de sociedad. Por lo tanto, no fue ni será esperable otra respuesta estatal que no sea la defensa de los intereses económicos, políticos y culturales que se han

beneficiados de las decisiones neoliberales, impuestas por la dictadura y continuadas bajo otro contexto por los gobiernos posteriores. De allí que las demandas del movimiento estudiantil tuvieron la capacidad de trazar un cuestionamiento profundo al modelo de desarrollo que tiene a la desigualdad como parte de su estrategia, que negocia con los derechos sociales, que concentra altamente el poder de los mercados a favor de los grupos económicos nacionales y transnacionales, el sistema político y el de comunicación.

El desprestigio de la política y sus instituciones hegemónicas resulta inocultable después de las luchas estudiantiles. Sus precarios soportes de legitimidad han quedado al descubierto. Los procesos de movilización social y la agenda abierta con sus demandas y planteamientos lograron desmitificar las utopías del neoliberalismo como “modelo de progreso”, porque sus éxitos económicos en todos estos años no han hecho más que profundizar las desigualdades. El modelo de crecimiento no está configurado para derramar sus beneficios al conjunto de la sociedad. El espejismo de una prosperidad basada en iniciativas individuales y en la “libertad de elección”, no ha sido más que eso, espejismo: la población percibe ahora de manera más nítida que los beneficios y las oportunidades bajo este modelo no son para todos.

Al momento de escribir estas conclusiones no estamos en posibilidad de saber cuál será el rumbo que tomarán los acontecimientos políticos ante los contenidos de la reforma educativa. Lo que sí es posible hipotetizar es que la trama de intereses que se han conformado en el terreno de la educación, en todos sus niveles, seguramente se opondrán a las reformas. En segundo lugar, los contenidos específicos de los cambios no pueden limitarse a una simple respuesta a la demanda estudiantil, cuando éstas han colocado en el centro del debate político el problema estructural del carácter público de la educación, la gratuidad de su acceso y la necesidad de su formulación como un derecho universal. De allí que resulte plausible plantear, también, que el país recibirá seguramente con activo beneplácito si el proceso transcurre con el esfuerzo articulado de las voluntades sociales, políticas y gubernamentales. Sin embargo, una reforma que no afecte sustantivamente los intereses que han hecho de la educación un gran mercado

no aportará el consenso necesario para la defensa y profundización de los cambios. Terminar con la educación mercantilizada implica establecer mecanismos efectivos para eliminar el lucro con los recursos públicos, así como la selección practicada en las instituciones subvencionadas a través del copago con sus efectos discriminadores. Pero si el impulso de este proceso en su dinámica concreta no desborda las formas tradicionales de hacer política, siguiendo la ya conocida deliberación en la cúpula del sistema y bajo la amenaza o el chantaje de la derecha, sin activar un proyecto de transformación para desmontar la política neoliberal, manteniendo –por ejemplo- el subsidio a la demanda o la focalización, seguramente será un período de magros alcances, otra vez, sin horizonte de transformación y sin el consenso activo de los actores sociales y políticos involucrados en la democratización del sistema. Es probable que sea demasiado temprano para hilvanar un razonamiento como este, pero hay una historia previa que no lo hace demasiado descabellado.

### **Referencias**

- Boric, G. “Los horizontes del movimiento estudiantil” en *Le Monde Diplomatique*, Santiago de Chile, 07 de mayo de 2012.
- Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAG (2014), *La disputa electoral en América Latina 2014*, Quito, Perú.
- Centro de Estudios Públicos, Estudio Nacional de Opinión Pública, Número 66, Abril de 2012. En [www.cepchile.cl](http://www.cepchile.cl). [13 de junio de 2014].
- Fazio, H. (2012), *Indignación. Causales socioeconómicas*, Santiago de Chile, LOM Ediciones.
- Ffrench-Davis, R. (2004), *Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad. Tres décadas de política económica en Chile*, Buenos Aires, Siglo XXI Editores.
- Fontaine, A., C. Larroulet, J. A. Viera-Gallo, Ignacio Walker [eds.], (2007), Santiago de Chile, Centro de Estudios Públicos (CEP), Proyectamérica, Libertad y Desarrollo y Corporación de Estudios para Latinoamérica (CIEPLAN).
- FORBES (2012), The World Billionaires, [http://www.forbes.com/billionaires/list/#p\\_1\\_s\\_a0\\_All%20industries\\_Chile\\_All%20states](http://www.forbes.com/billionaires/list/#p_1_s_a0_All%20industries_Chile_All%20states), [13 de junio de 2014].

- Fundación Terram. (2011), *Educación 2013*, Santiago de Chile, Fundación Terram. [http://www.elmostrador.cl/media/2011/09/terram\\_educacion\\_final2011.pdf](http://www.elmostrador.cl/media/2011/09/terram_educacion_final2011.pdf) [13 de junio de 2014]
- Garretón, M.A. (2012), *Neoliberalismo corregido y progresismo limitado. Los gobiernos de la Concertación en Chile, 1990-2010*, Santiago de Chile, Editorial ARCIS/CLACSO Ediciones.
- Garretón, M.A., M. A. Cruz, F. Aguirre (2012), “La experiencia de los consejos asesores presidenciales en Chile y la construcción de los problemas públicos”, en *Revista Mexicana de Sociología*, vol. 74, núm. 2, abril-junio, México, Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 303-340.
- Guerrero, M. (2011), “La marcha de los pingüinos”, en Arrate, Jorge [comp.], *La (re)vuelta de la izquierda*, Chile, Ocho libros Ediciones.
- Huneus, C. (2003), *Chile un país dividido. La actualidad del pasado*, Santiago de Chile, Catalonia Ediciones.
- Lechner, N. (2002), *Las sombras del mañana. Dimensión subjetiva de la política*, Santiago de Chile, LOM Ediciones.
- Mayol, A., (2012), *No al lucro. De la crisis del modelo a la nueva era política*, Santiago de Chile, Debate Ediciones.
- Monckeberg, M. O., (2013), *Con fines de lucro. La escandalosa historia de las universidades privadas en Chile*, Santiago de Chile, Debate Ediciones.
- Oliver, L. y F. Savoia. (2012), “Análisis de la coyuntura latinoamericana 2011”, en *Observatorio Social Latinoamericano*, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Año XIII, No. 31, Buenos Aires, Argentina, pp. 143-167.
- Ramis, Á. (2011), “Genealogía de una generación maldita. Las luchas estudiantiles en defensa de la educación pública”, en *Le Monde Diplomatique – edición chilena*, Octubre 2011. <http://www.lemondediplomatique.cl/Genealogia-de-una-generacion.html> [16 de junio de 2014].
- Roitman Rosenmann, M. (2012). *Los indignados. El rescate de la política*, Madrid, Ediciones Akal.

Quiroga, Y. y J. Ensignia [eds.] (2010), *Chile en la Concertación (1990.2010) Una mirada crítica, balance y perspectiva*, Tomo II, Santiago de Chile, Friedrich Ebert Stiftung.

Salinas Figueredo, D. (2007), *Vicisitudes de la Democracia. Entre el peso del modelo y los límites de la política en Chile*, Ciudad de México, UIA / Plaza y Valdés Editores.

Servicio Electoral. (2010), *Inscripción por grupos étnicos y sexo, en cantidades y porcentaje. 1988-2009*, Servel,

[http://www.servel.cl/servel/Controls/Neochannels/Neo\\_CH330/Deploy/EinscritosGE.xls](http://www.servel.cl/servel/Controls/Neochannels/Neo_CH330/Deploy/EinscritosGE.xls), [13 de junio de 2014]. – Faltan fuentes

-Evolución del padrón electoral por grupos étnicos y sexo, en cantidades y porcentajes 1988-2004. En [www.servel.cl](http://www.servel.cl), [16 de junio de 2014].

-Revolución del padrón electoral por grupos étnicos y sexo, en cantidades y porcentajes 1988-2009. En [www.servel.cl](http://www.servel.cl), [16 de junio de 2014].

-Presidentes de Chile 1990-2004. Resultado de Elecciones presidenciales. Elección presidencial 2014-2018. En [www.servel.cl](http://www.servel.cl), [16 de junio de 2014].

- Resumen histórico. Resumen Padrón Electoral por Sexo. En [www.servel.cl](http://www.servel.cl), [16 de junio de 2014].

Thazá Manríquez, M. (2003), “Apuntes para una resignificación política de los jóvenes a partir del eje igualdad-desigualdad”, en *Revista Última Década*, núm. 19, noviembre, pp. 1-24.

Tironi, E. (2012), “Mundos opuestos”, en *Columna de Opinión El Mercurio*, 19 de junio de 2012.

[http://www.elmercurio.com/blogs/2012/06/19/7704/mundos\\_opuestos\\_1.aspx](http://www.elmercurio.com/blogs/2012/06/19/7704/mundos_opuestos_1.aspx) [16 de junio de 2012].

Tetelboin, C. (2013). “Sistema de saúde, desenvolvimento e direitos no Chile: uma questão a ser construída”, en Cohn, A. [Org.]. *Saúde, cidadania e desenvolvimento*, Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o desenvolvimento, E-Papers. Brasil, p.p. 185-219.

Tribunal Calificador de Elecciones Chile. Acta de proclamación. Rol N° 170 -2013. 10 de enero de 2014.

Vargas, Mónica (2011), “La nueva explosión de las mayorías: protestas sociales en el gobierno de Michel Bachelet”, en *Revista América Latina*, número 11, pp. 69-92.

Vallejo, C. (2011), “¿Y cuál es la revolución educativa?”, en *Le Monde Diplomatique*, enero-febrero de 2011. <http://www.lemondediplomatique.cl/article1572,1572.html> [16 de junio de 2014].

Waissbluth, M. (2013), *Cambio de rumbo. Una nueva vía chilena a la educación*, Santiago de Chile, Random House Mondadori.

Artículo recibido el 17/6/2014

Artículo aceptado el 28/9/2014